**22º SIMPOSIO SOBRE LEGISLACION TRIBUTARIA ARGENTINA**

**Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**3 al 6 de noviembre de 2020**

**Comisión N° 2: Tributación y Género**

**Presidenta:  
Dra. C.P. Miriam S. Roldan  
  
Relator:  
Dr. C.P. Sebastián M. Domínguez  
  
Secretaria:  
Dra. C.P. Valeria Petrucci**

**Título:**

**SISTEMAS TRIBUTARIOS AMIGABLES AL GÉNERO**

**AUTORA:**

**NOELIA ELIZABETH MODICA**

**Lic. En Administración de Empresas - Contadora Pública**

**INDICE**

1 Resumen…………………………………………………………………………………3

2 Primer paso: poner en contexto……………………………………………………… 4

La situación en Argentina……………………………………………………….. 5

3 Que significa analizar los impuestos con perspectiva de género …………………9

Sistemas tributarios regresivos y sesgos tributarios…………………………14

4 Sistemas Tributarios Comparados…………………………………………………..16

El caso de Colombia……………………………………………………………..16

El caso de España……………………………………………………………….18

Algunas reseñas de otros países………………………………………………19

5 Breve análisis de diversas propuestas………………………………………………20

Impuestos a las ganancias……………………………………………………...20

Impuestos al consumo…………………………………………………………..23

Otros……………………………………………………………………………….25

6 Conclusiones…………………………………………………………………………...27

7 Bibliografía……………………………………………………………………………...29

**RESUMEN**

En Argentina en los últimos años la agenda de género ha ganado mayor importancia, teniendo como resultado una serie de leyes y reformas, que buscan la ampliación de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. En esa línea de pensamiento, en el último tiempo ha cobrado relevancia el análisis de la tributación con perspectiva de género.

El presente trabajo pretende analizar el impacto que tiene la política fiscal en las desigualdades entre hombres y mujeres. El propósito de esta investigación es demostrar que desde el sistema tributario se pueden ejecutar medidas tendientes a reducir las desigualdades actuales. Para ello, primeramente, se realizará un análisis de las brechas de género existentes mostrando datos estadísticos de la actual situación de inequidad entre ambos géneros. Luego se expondrán fundamentos sobre qué significa analizar la materia tributaria desde la perspectiva de género. Seguidamente se analizarán los casos de Colombia y España y se mencionarán otras cuestiones de diversos países.

El trabajo concluye con un breve análisis de distintas propuestas a aplicar en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado que tienen como finalidad reducir los efectos de los sesgos implícitos existentes.

Con la aparente “neutralidad” del sistema tributario actual no alcanza, se evidencias sesgos implícitos que violentan la igualdad de las mujeres. Es por ello que se requiere repensar las políticas tributarias desde una perspectiva de género, que propongan acciones tendentes a superar las barreras existentes.

**2 Primer paso: poner en contexto**

Tendrán que pasar 257 años para que exista igualdad entre hombres y mujeres en el plano económico y laboral según el foro económico mundial[[1]](#footnote-1).

A su vez, numerosos estudios remarcan que América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo. Como bien lo explica María Pazos Morán: “Hay rasgos en los que la realidad latinoamericana parece obstinarse en permanecer inalterada: los problemas de pobreza y exclusión se mantienen muy importantes, continúan sin constituirse sistemas de educación básica y salud de acceso universal, fenómenos como el trabajo infantil o la economía sumergida nefastos desde un punto de vista tanto económico como social, continúan siendo rasgos centrales (no minoritarios) de las sociedades; existen problemas estructurales e importantes de violencia, y singularmente de violencia de género; y por último, y en conjunción con lo anterior, los sistemas fiscales no han adquirido aún el diseño, el tamaño y la legitimidad necesaria. Todos estos elementos lastran el desarrollo social y económico sostenible[[2]](#footnote-2)”.

En el informe “Impuestos sexistas en América Latina[[3]](#footnote-3)” se proporcionan algunos datos relativos a la región. Las estadísticas revelan que:

* En 2017, la tasa de participación laboral, que relaciona el número de personas de 15 años y más que trabaja o busca trabajo y el total de la población de 15 años y más, fue de 62,2% para la región de América Latina y el Caribe. Al desagregar por sexo este indicador, la brecha entre hombres y mujeres es de 24,7 puntos porcentuales, con una tasa de participación de 50,4% para las mujeres y de 75,1% para los hombres.
* La carga de trabajo no remunerado que tienen las mujeres es mucho mayor a la de los hombres. En todos los casos, las horas por semana que en promedio dedican las mujeres al trabajo no remunerado son más del doble de las que dedican los hombres a este tipo de trabajo, y llegan a ser el triple o más en Ecuador, México y República Dominicana.
* El promedio de horas que en total dedican las mujeres al trabajo (remunerado y no remunerado) supera al que dedican los hombres.

**La situación en Argentina**

En el informe denominado “Las brechas de género en la Argentina[[4]](#footnote-4)” publicado por El Ministerio de Economía publicó en Marzo de 2020 un informe generado a través de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. En el mismo se exponen los siguientes datos:

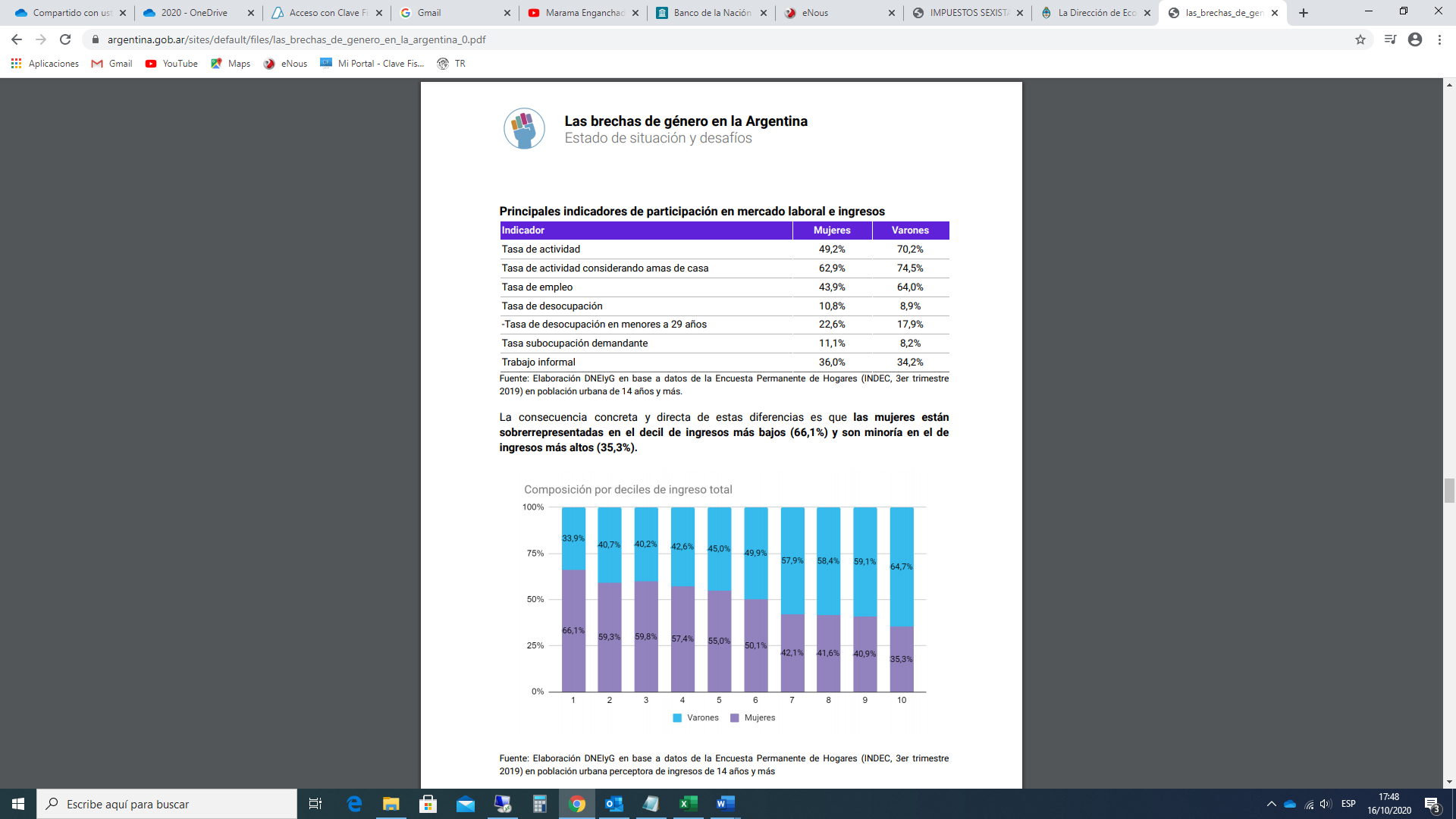
* Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganan, en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%.
* La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas personas, son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía con un 23%.
* La tasa promedio de la participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49,2%, 21 puntos porcentuales más baja que la de los varones (71,2%).
* Las mujeres que cuentan con estudios universitarios completos o incompletos tienen una tasa de actividad de 74,3% mientras que las que poseen secundario incompleto muestran una participación del 35,9% y las que poseen estudios secundarios completos 55,1%.
* Si se consideran solamente las horas de trabajo en el mercado de los varones, estos trabajan 9,8 horas más por semana que las mujeres. Sin embargo, si se suman tanto las jornadas pagas como las no pagas, es posible afirmar que las mujeres trabajan 7 horas más por semana que los varones.



* La brecha de ingresos totales entre varones y mujeres es del 29,0%, calculada como la variación relativa entre la media de ingresos de los varones y el promedio de ingresos de las mujeres.
* Esta brecha se agrava cuando se comparan asalariadas y asalariados informales, superando el 35,6% promedio de diferencia entre ingresos. La brecha entre varones y mujeres de calificación profesional es de 28,6%, mientras que entre trabajadoras y trabajadores no calificados, es del 35,7%.
* Desagregando los datos por jerarquía laboral, se observa que entre los jefes y las jefas la distancia es del 24,1%, entre asalariados y asalariadas es del 23% y, entre cuentapropistas, del 29,4%. En todos los casos los varones ganan más que las mujeres.
* Respecto al acceso a puestos jerárquicos, los varones constituyen el 57% del total de los ocupados. De ellos, el 8,5% de los varones tienen puestos de jefatura o dirección, mientras que este porcentaje en mujeres es del 4,7%.



* La principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. Estas tareas están extremadamente feminizadas: entre las 877.583 personas que se dedican al servicio doméstico, el 96,5% son mujeres.
* Asimismo, aunque en el país hay una ley que regula el trabajo en casas particulares y fija el salario de este sector en $16.515 mensuales, la mayor parte de estas trabajadoras no accede a sus derechos básicos. El 72,4% no percibe descuento jubilatorio y el promedio de salarios que perciben es de $8.167, de acuerdo a datos de la EPH. Este valor implica que una trabajadora doméstica cobre 46 pesos por cada 100 que recibe una empleada del sector privado y 30 pesos por cada 100 que recibe una trabajadora formal. Si se toma como parámetro el salario promedio de un varón, las empleadas domésticas ganan 26 pesos por cada 100 pesos que gana uno de ellos. Estas mujeres cobran prácticamente la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, constituyéndose en las trabajadoras más pobres de toda la economía.



Por su parte, el Banco Central de la República Argentina lanzó la campaña “Mujeres y brecha económica[[5]](#footnote-5)”, realizada sobre la base de estadísticas monetarias, financieras, cambiarias y crediticias oficiales, y apoyada en cinco ejes que visibilizan las inequidades de género existentes:

• Brecha de ingresos: la brecha de ingresos entre mujeres y varones es del 27%. La diferencia de ingresos existe a pesar de que las mujeres tienen mayor formación educativa: el 60% de las mujeres tienen educación secundaria o superior en contraposición del 55% en los varones.

• Brecha en el acceso al crédito: los varones acceden casi el doble que las mujeres a créditos que requieren mayores garantías y tiene plazos más largos de repago, como préstamos prendarios e hipotecarios. En el caso de créditos hipotecarios la relación de acceso es de 0,5% de mujeres vs. 1% de varones y en los préstamos prendarios la relación de acceso es de 1% de mujeres vs. 1,9% de varones.

• Techo de cristal: hay un 30% menos mujeres que varones en puestos jerárquicos y de decisión en ámbitos laborales. El 5,4% de las mujeres ocupa cargos de jefatura o dirección mientras que el 7,8% de los varones acceden a estas posiciones jerárquicas”.

De todo lo expuesto resulta prácticamente imposible negar el contexto de desigualdad: las mujeres son quienes ocupan los mayores índices de desocupación, quienes más trabajan en el mercado informal, quienes tienen menor acceso al crédito, lo cual vulnera la igualdad y condiciona al género femenino en el ejercicio pleno de derechos. Continúan existiendo las brechas en materia de autonomía económica, siendo más del doble la proporción de mujeres sin ingresos propios frente a la de los hombres. Todo esto se conjuga en mayores posibilidades de formar parte de hogares de bajos ingresos, lo que se denomina feminización de la pobreza.

A su vez, se enlazan la pobreza económica con la pobreza de tiempo: hay una sobrecarga de trabajo de las mujeres, al asumir ellas la mayor responsabilidad en el cuidado y la sostenibilidad de la vida, y por ende, ver limitado su acceso a oportunidades de participación, formación, actividades políticas, culturales, de recreación, etc. Todo ello acarrea otras consecuencias no económicas, ya que en esos escenarios las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia económica y doméstica.

**3 Que significa analizar los impuestos con perspectiva de género**

En las últimas décadas, numerosos estudios pusieron de manifiesto las inequidades existentes en políticas tributarias que podían aparecer como neutrales en términos de género. En el trabajo “Los impuestos como herramienta para la equidad de género” se expusieron los resultados parciales del proyecto “Tributación y Género: mejorando la generación de recursos públicos y la protección social en países en desarrollo[[6]](#footnote-6)”, se manifiesta al respecto: “las políticas tributarias, como toda política económica, no son neutrales a las características socio-económicas de las personas, entre ellas el género”.

Un sistema tributario cumple distintos roles. El primero de todos ellos es el de recaudar, pero no es el único. Un sistema tributario además cumple el rol de reasignar precios incentivando o desincentivando el consumo de determinados bienes y un rol de redistribución, que consiste en trasladar recursos de una región y/o de un sector de la economía o de la población con mejor dotación de recursos, hacia otras regiones o sectores de la economía o de la población con menores recursos. Analizar el sistema tributario con perspectiva de género, no solamente implica abordar el tema de la recaudación, es decir que el monto recaudado sea suficiente para asegurar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para varones y mujeres en condiciones de igualdad, sino también que estos recursos sean recaudados de una manera consistente con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva.

Pero como ya se ha mencionado, la recaudación no es el único fin de un sistema tributario. El mismo tiene además un carácter extra fiscal. Los estados utilizan los tributos como instrumento de regulación cuando pretenden influir en los comportamientos y tomas de decisiones de la población. Lo hacen ya sea a través del otorgamiento de beneficios fiscales (exenciones, desgravaciones, devoluciones, etc.) o generando una acción desmotivadora (como es el caso de impuestos internos en nuestro país)

La inequidad en los sistemas fiscales desde una perspectiva de género significa que las políticas y sus impactos contribuyen a profundizar las discriminaciones y desigualdades que afectan la realización de derechos y el desarrollo de las mujeres, ya que impiden el acceso a recursos suficientes para lograr condiciones dignas de vida. Por ese motivo, un sistema tributario equitativo en términos de género requiere que las mujeres sean tratadas en condiciones de igualdad con los varones, como individuos autónomos e independientes, promoviendo no sólo la igualdad formal entre los sexos sino la igualdad sustantiva, incluyendo la consolidación de relaciones familiares equitativas.

La Dra. Julia María Díaz Calvarro considera que “la estructura y el diseño del sistema fiscal desde la perspectiva de género puede coadyuvar o todo lo contrario, a conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, en definitiva, a la construcción de una sociedad más justa y sostenible[[7]](#footnote-7)”. Para la Dra. Agustina O´Donell “Hay que entender a la política tributaria como una herramienta para reducir desigualdades sociales y económicas y como una herramienta para fomentar, inducir, incentivar y poner en práctica políticas orientadas a la igualdad. Hay que avanzar en un sistema tributario amigable al género, inclusivo, como las leyes tributarias pueden ir incorporando algunas medidas, técnicas para contemplar la situación de las mujeres más vulnerables[[8]](#footnote-8)”.

En Argentina, el 10 de Diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios, transfiriéndose las competencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)[[9]](#footnote-9). Constituye el primer caso en América Latina, clave en un contexto de crisis como el que enfrenta la Argentina en este momento. En Marzo de este año presentaron el ya comentado informe “Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos” en donde se afirma que “Las herramientas de política pública que fueron pensadas durante mucho tiempo como neutrales respecto al género son, en realidad, ciegas a los efectos de género que producen. De ese modo, la desigualdad tiende a reproducirse y a reforzarse: cuando no existe una decisión política y se da lugar a la inercia, las brechas de género (de ingresos, laborales, de tiempo), e inequidades en general, tienden a expandirse[[10]](#footnote-10)”.

Constitucionalmente, la lucha por la igualdad de género encuentra sustento en el art 75 incisos 22 y 23 de nuestra Carta Magna.

En el año1985 el estado argentino ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 1994 esa convención adquiere carácter constitucional en el art 75 inciso 22. Posteriormente, los principios de dicha Convención fueron receptados mediante la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres física, psicológica y económica.

A su vez, el inciso 23 del art 75 de la Constitución Nacional establece el correctivo constitucional de la desigualdad. Al respecto establece: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Las discriminaciones por razones de sexo vulneran además otros derechos de rango constitucional: el derecho a la igualdad, el derecho de propiedad y el derecho de usar y disponer de esa propiedad, entre otros.

La Dra. Silvina Erica Coronello, señala que “la protección constitucional es amplia, pero por cuestiones de género, el acceso al ejercicio de este derecho fundamental se encuentra condicionado desde el punto de vista fáctico. Se vulnera el principio constitucional de igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna en su proyección de igualdad en la ley, es decir, no referida a la igualdad ante la ley (igualdad formal) sino referida a la igualdad en igualdad de condiciones. Ello así, toda vez que se tratan de la misma manera situaciones que en los hechos no lo son atento a las desiguales condiciones en las que deben desarrollarse cada uno de los géneros. La igualdad de acceso de la mujer al ejercicio del derecho de propiedad resulta ficticia. Por ello resulta necesario un cambio de paradigma que active el rol del Estado a fin de garantizar mediante políticas públicas una economía en la cual tanto hombres como mujeres puedan acceder al ejercicio del derecho de propiedad en igualdad de condiciones[[11]](#footnote-11)”.

Jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación denomina a aquellos grupos sujetos a distintos tipos de discriminación “colectivos uniformes que requieren tutela especial por su estado de mayor vulnerabilidad”. Entre ellos se encuentran los niños, mujeres y ancianos.

Al respecto del colectivo relacionado con la vejez resulta relevante hacer referencia al "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad[[12]](#footnote-12)" del 26 de Marzo de 2019 en donde el Alto Tribunal establece la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias a esta mujer jubilada. En el mismo, los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti destacaron que debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Luego recalcaron que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables -entre ellos los jubilados-, estableciendo medidas de acción positivas con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. En el considerando 15 del fallo, los mencionados jueces aseveran: “a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente "a cualquier precio", pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales”

El fallo cita al prestigioso constitucionalista Dr. Bidart Campos al referir “resulta constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa 'discriminación' se procura compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre aquellas (...) se denomina precisamente discriminación inversa porque tiende a superar la desigualdad discriminatoria del sector perjudicado..."

Además, la Corte remarca la importancia de analizar la capacidad contributiva teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de estos colectivos, en este caso de la ancianidad. En este punto señalaron: “la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja. En esas condiciones el estándar de revisión judicial históricamente adoptado por esta Corte, según el cual los términos cuantitativos de la pretensión fiscal solo deben ser invalidados en caso de confiscación, no permite dar una adecuada respuesta a la protección constitucional de contribuyentes como los anteriormente descriptos. Ello no supone desterrar el criterio de la "no confiscatoriedad" del tributo como pauta para evaluar la adecuación cuantitativa de un gravamen a la Constitución Nacional, sino advertir que tal examen de validez, centrado exclusivamente en la capacidad contributiva potencial del contribuyente, ignora otras variables necesarias, fijadas por el propio texto constitucional, para tutelar a quienes se encuentran en tan excepcional situación”.

La Corte finaliza redefiniendo de esta forma el concepto: “el análisis integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación, pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo. Dicho de otro modo: la misma capacidad económica -convertida sin más por el legislador en capacidad contributiva- está destinada a rendir en ambos casos de manera diferente, desigualando en la realidad lo que el legislador igualó”.

El fallo finaliza con un reclamo al poder legislativo, al cual se solicita “Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”.

Si bien el mencionado fallo apunta directamente sobre los derechos de las personas ancianas, no resulta ilógico pensar que la situación del colectivo de las mujeres debiera analizarse desde similares enfoques.

El Dr. Francisco Ferrer, en el marco del ciclo de charlas organizada por la cátedra de Derecho Tributario de la Universidad del Este opinó al respecto del fallo de García “el fallo de la Corte Suprema incorpora una nueva visión sobre como tenemos que analizar la capacidad contributiva. Deja una puerta abierta muy grande para que por esa vía comencemos a analizar cada tributo en particular con las dificultades que esto va a tener si además no se reflejan en modificaciones legislativas. En este caso se declara la inconstitucionalidad, pero lo que se pretende es que el legislador adapte el impuesto a las ganancias a las necesidades que constitucionalmente impuso la reforma del año 1994 en este caso para uno de los colectivos protegidos[[13]](#footnote-13)”.

Asimismo, la Dra. Agustina O´Donell en una charla organizada por la Universidad de Moreno[[14]](#footnote-14) menciona otro precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo “González Vitorica” del 21 de Noviembre de 2018 en donde remarca los votos de los Dres. Maqueda y Lorenzetti. Los mismos expresaron: “introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción correspondiente al grupo de los menos favorecidos, principios que ha recibido nuestra Constitución Nacional al establecer la regla de la igualdad y justificar la distribución diferenciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos humanos[[15]](#footnote-15)” El mencionado fallo continúa remarcando “como lo ha expresado el tribunal, además de la especial atención que aquellas merecen por parte de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, razón por la que la consideración primordial de su interés, debe orientar y condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de esta clase de litigios.”

**Sistemas tributarios regresivos y sesgos tributarios**

En un informe publicado por la Oxfam[[16]](#footnote-16) se afirma que “la política fiscal es un instrumento clave para luchar contra la desigualdad y la exclusión. Sin embargo, esto depende (entre otros factores) de lo progresivo o regresivo que sean los sistemas tributarios[[17]](#footnote-17)”. El mismo describe a los sistemas tributarios progresivos como “aquel que impone una mayor carga o presión tributaria en aquellas personas y/o sectores sociales que tienen mayores ingresos y que, por ende, tienen una situación de ventaja en la sociedad”. Entre las principales características de los mismos se resalta:

* Estos sistemas buscan redistribuir las ganancias económicas que genera una sociedad y reducir las desigualdades.
* Tienden a ser más sensible a los impactos diferenciados que tienen los impuestos en la vida de mujeres y hombres, favoreciendo a las mujeres que suelen estar en posiciones de menor ingreso y mayores desventajas sociales y culturales.

En cambio, un sistema tributario regresivo es aquel que impone una mayor carga o presión tributaria en las personas y/o sectores con menores ingresos y riqueza y en general en situación de desventaja dentro de una sociedad. Los rasgos distintivos de este tipo de sistemas son:

* Estos sistemas suelen favorecer la acumulación de ingresos y riqueza en el quintil más alto de la sociedad.
* Tienden a empeorar las condiciones de vida de las personas con menores ingresos y con mayores desventajas económicas y no-económicas, profundizando así la desigualdad económica y las brechas en el bienestar.
* Estos sistemas suelen dificultar la provisión de servicios sociales por parte del Estado, porque suelen ser consistentes con una baja capacidad recaudatoria.

Por otro lado, al analizar los tributos con perspectiva de género resulta necesario señalar la problemática relacionada con los sesgos de género. Los mismos pueden manifestarse de manera explícita e implícita. El sesgo de género explícito se materializa en diferencias existentes en las leyes o reglamentaciones y su aplicación a hombres y mujeres.

Janet Stotsky, ex vicedirectora del Departamento de Política Tributaria del Fondo Monetario Internacional, en el trabajo titulado “sesgos de género en los sistemas tributarios” manifiesta al respecto: “El sesgo genérico explícito resulta relativamente fácil de identificar, porque depende mayormente del lenguaje empleado en el código impositivo o en la reglamentación. Las formas implícitas son disposiciones de la ley y de la reglamentación que, debido a las convenciones sociales y al comportamiento económico de carácter típico, tienden a tener consecuencias diferentes para los hombres en comparación con las mujeres. En cambio, es mucho más difícil identificar el sesgo genérico implícito, dado que éste depende en gran medida de juicios de valor relativos al comportamiento social y económico deseado. Esos juicios tienden a variar considerablemente entre una sociedad y otra y de una época a otra. Ya sea explícito o implícito, el sesgo de género puede considerarse bueno o malo en función de los juicios de valor sobre el comportamiento social o económico que se estima conveniente. Ambas formas de sesgo han sido objeto de reforma en países que procuran alcanzar un sistema de imposición con neutralidad de género. Muchos países en el mundo han reformado el impuesto sobre la renta personal precisamente para eliminar este tipo de sesgo”[[18]](#footnote-18).

Sucede que, al combinar estas dos variantes: impuestos regresivos unidos a la existencia de sesgos se produce un doble efecto negativo en las mujeres. La alta carga tributaria en impuestos indirectos afecta la equidad social ya que pesan más en las poblaciones de menos recursos, no solo redistribución por niveles de ingresos sino en términos de desigualdades de género. En su análisis, Stotsky hace referencia al informe del año 2000 de Terence Smith, quien demostró, en el contexto sudafricano, que la carga del IVA en los hogares sudafricanos varía en función desnivel de renta, y que el IVA, expresado tanto como proporción del total de impuestos pagados como de los ingresos, guarda una relación inversa con estos últimos, de modo que los hogares de menor renta pagan una mayor proporción del impuesto total y de sus ingresos en concepto de IVA. Dada la concentración desproporcionada de mujeres en los grupos pobres, esto sugiere una forma de sesgo implícito[[19]](#footnote-19).

Por todo lo ello es que necesitamos hacernos más preguntas sobre los efectos de los tributos diferenciados por sexo, nivel socioeconómico, étnica, área de residencia, etc. ¿A quiénes se beneficia? ¿A quiénes se deja de beneficiar?

**4 Sistemas Tributarios Comparados**

**Caso Colombia**

Colombia representa un país pionero en América Latina en la defensa al colectivo de mujeres. En la Ciudad de Bogotá se desarrolló el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano en el año 1981. En 2004, se celebró la Segunda Conferencia Internacional de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, con apoyo de agencias de las Naciones Unidas. Su resultado fue la creación de la Red para América Latina y el Caribe sobre Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas.

En este país en 2017 se redujo la tasa de IVA de los productos de gestión menstrual del 19% al 5%. Sin embargo se continuó con la lucha a través del poder judicial. La Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-117/18 en Noviembre de 2018 dictada en la causa “Virviescas Ibargüen Danilo” declara la inconstitucionalidad del impuesto al valor agregado sobre productos de gestión menstrual.

Silvina Érica Coronello remarca el análisis que hizo la Corte Colombiana para llegar a esta decisión: “el fallo analiza el contexto de las cuatro diferencias de género básicas en la actividad económica: “el empleo remunerado, incluido el trabajo formal e informal, salarios y segregación ocupacional; el porcentaje de trabajo no remunerado que realizan las mujeres como el doméstico, el cuidado de niños, personas enfermas y de la tercera edad; los gastos de consumo y los derechos de propiedad. Respecto a las diferencias de género en el empleo, el citado tribunal señala que se ha constatado que “(i) la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral en todos los países es inferior a la de los hombres, aun cuando estas aportan más tiempo al trabajo remunerado y no remunerado; (ii) según la OCDE, en Colombia existe una diferencia de 20 puntos en tal acceso, lo cual se ha atribuido en parte a diferencias en los niveles educativos; (iii) en las Américas, la brecha salarial entre mujeres y hombres es de 25%”. Agrega el sentenciante que “el tipo de empleos a los que acceden las mujeres, en general, es de menor calidad, se encuentra en la informalidad y estas entran y salen de la fuerza laboral con más frecuencia que los hombres, al igual que tienen trabajos de tiempo parcial”. Con relación a las diferencias en el gasto, el tribunal colombiano destaca que “las mujeres en comparación con los hombres tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos en bienes como alimentos, educación y atención médica para los niños. Esa diferencia se torna relevante desde el impacto que tiene para las mujeres y su capacidad adquisitiva el incremento de impuestos sobre bienes de la canasta familiar”. Finalmente, como cuarto elemento, el citado tribunal colombiano indica “la dificultad de acceso para las mujeres a la titularidad de la propiedad. Los patrones de consumo de las mujeres también señalan que el hecho de que sus gastos se refieran en su mayoría al mantenimiento del hogar y el cuidado deotros, hace que se les resten posibilidades de ahorro para adquirir propiedad. Adicionalmente, la mayor proporción de tiempo que pasan las mujeres en labores domésticas y, por lo tanto, no remuneradas contribuye a esa realidad. Estas diferencias se concretan en barreras en la capacidad adquisitiva de las mujeres respecto a la propiedad. Adicionalmente, subsisten patrones culturales que determinan que la titularidad de la propiedad al interior de la familia es para los hombres, lo cual perpetúa la invisibilización y el desconocimiento del valor de las labores domésticas al interior de tal institución[[20]](#footnote-20)”

En el Conversatorio regional sobre Tributación y Género que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2020 organizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) la economista Natalia Moreno Salamanca vocera del programa “menstruación libre de impuestos” luego de comentar la lucha feminista en su país declara “ese fallo demuestra que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si un impuesto es legal o no este tipo de temas, si tiene afectaciones en materia de igualdad de género. Otra cosa: la conexidad de los derechos, cómo el fallo logra conectar como se viola el derecho a la educación[[21]](#footnote-21)”. Además menciona que posteriormente se pidió a la corte constitucional que extendiera el fallo para las copas menstruales. La Corte negó esa exención aduciendo que las copas eran artículos de lujo.

Las Dras. Agustina O’Donnell y Guillermina Gamberg en el texto “Impuestos para la igualdad de género[[22]](#footnote-22)” celebran la participación activa de la sociedad toda en el mencionado fallo. Al respecto señalan: “La decisión de la Corte Constitucional de Colombia también es interesante a poco que se analice el proceso que transitó dicho tribunal para tomarla ya que antes de dictar la sentencia, invitó a que dieran su opinión a la ciudadanía, al gobierno nacional y a distintas entidades, que lo hicieron tanto a favor y en contra. El que opinó en contra de la exención fue el Ministerio de Hacienda; sin embargo, la Ministra de Salud de la Nación del mismo gobierno y la Secretaría de la Mujer de Bogotá estuvieron a favor, al igual que la Defensoría del Pueblo. De igual modo, a favor de la exención dictaminaron el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Comisión de Juristas de Colombia, entidades que nuclean a los profesionales del derecho y de las ciencias económicas por entender que el impuesto violaba el derecho fundamental a lo que denomina como un mínimo vital. También dieron su opinión a favor los Rectorados de las Universidades más importantes del país, como expertos y expertas entendidos en la materia, ajenos a cuestiones políticas, que se refirieron a las “humillaciones de las mujeres en caso de no poder adquirir las compresas y tampones higiénicos. Resulta entonces elogiable la articulación de herramientas de participación y colaboración ciudadana en la justicia, y especialmente en las máximas instancias judiciales, en aquellos casos de indudable interés público o relevancia institucional, como acaso lo son las temáticas de género. Ampliar los canales de participación en la administración de justicia resulta prioritario e insoslayable, en orden a acercar el debate a la sociedad civil y profundizar el perfil democrático de los tribunales constitucionales”.

**Caso España**

Hasta el año 1991 la tributación en España era conjunta con carácter obligatorio. Resultaba obligatoria la acumulación de rentas de los miembros de la unidad familiar y su gravamen conjunto, lo que traía aparejado un notable incremento de la progresividad del Impuesto para aquellas familias con varios perceptores de rentas[[23]](#footnote-23). Actualmente, el artículo 11 de la Ley 35/2006 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece la individualización de las rentas independientemente del régimen económico del matrimonio. No obstante, “se mantiene su tratamiento actual en el impuesto para evitar numerosos perjudicados en los matrimonios en los que algunos no pueden acceder al mercado laboral”.

Otro aspecto para destacar en el caso de España es la deducción por maternidad, incorporada mediante Ley 46/2002 que reformó la ley del Impuesto a la Renta. Actualmente se encuentra regulada en el artículo 81 de la ley 35/2006 que establece: “las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este impuesto hasta en mil doscientos euros anuales por cada hijo menor de tres años[[24]](#footnote-24)”.

En su Exposición de Motivos se enumeran los objetivos que persigue, entre los que se encuentra, “atender las necesidades surgidas de realidades tales como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y las situaciones de discapacidad al tiempo que se estimula la incorporación de la mujer al mercado laboral[[25]](#footnote-25)”.

La beneficiaria de esta deducción es exclusivamente la madre trabajadora; únicamente se otorga al padre en el caso de muerte de la madre o si se le ha concedido la guarda y custodia. Deben tener, al menos, un descendiente cuya edad no sea superior a tres años y es indiferente que sea biológico o adoptado. Se exige que la beneficiaria desempeñe una actividad por cuenta propia o ajena, justificándose con el documento de cotización a la Seguridad Social.

**Algunas reseñas de otros países**

- Irlanda en 1993 pasó de la declaración conjunta a nombre del esposo, con imposición optativa en forma separada sobre la renta laboral de la mujer, a un régimen de declaración conjunta a nombre del cónyuge con mayores ingresos, con imposición optativa en forma separada sobre la renta laboral del otro cónyuge[[26]](#footnote-26).

- Los Países Bajos en 1984 dejaron de otorgar una asignación exenta de impuestos más alta a un hombre casado que a una mujer casada, a una desgravación fiscal básica igual[[27]](#footnote-27).

- En Sudáfrica en 1995 se dejó de gravar a las personas solteras y a las mujeres casadas con una escala de tipos más altos que los aplicables a los hombres casados, y se adoptó en cambio una escala impositiva unificada[[28]](#footnote-28).

- Reino Unido: en 1990 se sustituyó el régimen de declaración conjunta del impuesto a la renta (con la opción de declaración por separado si la esposa percibía renta laboral) por uno de declaración individual obligatoria. Antes de 1990, si la pareja presentaba declaraciones por separado, toda la renta generada por los bienes se atribuía al esposo[[29]](#footnote-29).

- En Canadá, el gobierno quitó el impuesto rosa (impuesto al consumo sobre productos de gestión menstrual) en 2015 luego de que una iniciativa juntara 74 mil firmas pidiendo su remoción[[30]](#footnote-30).

- En Italia y España desde 2019 se aplica una tasa de IVA reducida en IVA sobre productos de gestión menstrual[[31]](#footnote-31).

- En Irlanda los productos de gestión menstrual están exentos[[32]](#footnote-32).

**5 Breve análisis de diversas propuestas**

**Impuestos a las ganancias**

En el impuesto a las ganancias para personas humanas la discriminación explícita en razón del género puede adoptar diversas formas, entre ellas las normas que establecen la declaración conjunta o por familia, la asignación de exenciones, deducciones y otras desgravaciones fiscales.

Es importante destacar que la mayoría de los países aplican actualmente un régimen de impuesto sobre la renta personal que reconoce al individuo como unidad contribuyente, de modo que todas las personas físicas son responsables de presentar una declaración impositiva individual en la medida que realicen alguno de los hechos imponibles gravados por la ley de ganancias.

Sin embargo, los impuestos sobre la renta personal suelen ser bastantes complejos, de forma tal que repercuten en un gran número de comportamientos económicos, tales como la inversión, el trabajo, el ahorro y el nivel de consumo. En consecuencia, es posible identificar sesgos implícitos de género en cualquier impuesto sobre la renta personal.

En Argentina, el último sesgo explicito regulado por el artículo 30 de la ley del impuesto a las ganancias y reglamentado en el artículo 51 del decreto reglamentario fue eliminado por la ley 27.430 con vigencia desde el 27 de diciembre de 2017. El mismo establecía que los bienes gananciales los declaraba el hombre como regla, mientras que la excepción era la declaración de la mujer de su parte.

Sin embargo se pueden analizar diversos sesgos implícitos. Existen algunas propuestas para neutralizar los mismos. Algunas de ellas son:

* Permitir la deducción del conviviente. Actualmente solo se puede tomar la deducción si el/la contribuyente está casada/o y el/la cónyuge no tiene ingresos superiores al mínimo no imponible. Existen propuestas enfocadas a ampliar la deducción al conviviente. De esta manera se adecuaría la deducción a las leyes civiles.
* Sobre el mismo eje, se remarca la necesidad de redefinir el papel que juegan las deducciones por carga de familia. En este sentido, “una mirada de género promovería una mayor relación entre las mismas y las responsabilidades de cuidado que implican las personas dependientes que le dan sustento. El hecho que las deducciones por cargas de familia no se encuentren a disposición de todas las personas (y particularmente de aquellas de menores ingresos) lleva a pensar que el tema debería abordarse por fuera del sistema de tributación, para lograr un tratamiento más universal del mismo. Específicamente, debería promoverse el desarrollo de una política pública de cuidado, que garantice el acceso a servicios de cuidado (infantil y de personas mayores y enfermas) para todas aquellas personas que lo requieran, en condiciones de equidad, tanto en el acceso, como en la calidad. Si existiese un desarrollo en este sentido, la existencia de las deducciones por carga de familia en la tributación a las ganancias personales podría revisarse”[[33]](#footnote-33). Hay quienes proponen además sustituir el concepto “cargas de familia” por “gastos familiares”, eliminando la connotación negativa de la palabra “carga”.
* Incrementar las deducciones para familias monoparentales. Entre las conclusiones del informe Impuestos y Género en Argentina “los hogares monoparentales enfrentan una carga tributaria más gravosa que los restantes tipos de hogares, en el caso de trabajadores asalariados y autónomos. Esto obedece a dos razones: ante el mismo nivel de ingreso en el hogar, debido a la base individual de contribución un hogar con dos perceptores puede no tributar ganancias porque, individualmente considerados, ningún cónyuge alcanza el mínimo no imponible. En segundo lugar, opera el efecto de las deducciones por carga de familia: en los hogares monoparentales no pueden realizar la deducción por cónyuge en la ganancia neta, lo que determina una mayor base imponible y, dado el carácter progresivo de las alícuotas de contribución, en un mayor nivel de imposición[[34]](#footnote-34)”.

Actualmente se podría producir la paradoja de que hogares monoparentales conformados por una madre soltera con dos hijos terminen pagando más impuestos en relación a sus ingresos que un hogar biparental de mayores ingresos con tres hijos.

* Eliminar el tope de deducción de empleadas domésticas. Por ley 26.063 a partir de 2005 se admite como deducción general el importe abonado al personal de casas particulares pero tomando como tope el mínimo ni imponible anual. El tope es por contribuyente sin importar la cantidad de empleados de casa particulares que se declaren, cantidad de horas trabajadas, ni la tareaquerealizan.

Las contadoras María Florencia Fernández y María Fernanda Lauín, expusieron los fundamentos para la construcción de una reforma tributaria con perspectiva de género en donde presentaron la reforma propuesta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal. En dicha exposición, María Fernanda Lauín manifestó: “Se propone que la deducción de sueldos de personal de casas particulares se haga por el total pagado según recibos declarados en la Administración Federal de Ingresos Públicos más el importe pagado por cargas sociales, que no tenga tope por contribuyente ni por cantidad de personal empleado, que sea reconocido como un gastos necesario para generar ganancia gravada.Sostener una política que permita la deducción completa o cercana a la real de los sueldos del personal doméstico aboga por un doble beneficio: uno es el de mejorar el salario real de quienes tienen entre sus responsabilidades ocuparse del hogar, de los niños y de los ancianos y por otro lado es formalizar infinidad de trabajadores domésticos para que por fin dejen de formar parte de la gran masa de empleo en negro[[35]](#footnote-35).”

* Fomentar medidas tendientes a estimular la inserción laboral de las mujeres. Entre ellas: algún tipo de exención impositiva al ingreso de las mujeres al mercado laboral, o a la provisión de servicios de cuidado, que permita reducir su precio de modo tal que salir a trabajar resulte algo costeable. Cabe recordar la deducción por maternidad vigente en la legislación española, medida diseñada específicamente para potenciar la permanencia de la mujer en el mercado laboral.

Ente las defensoras de este tipo de medidas se encuentran Natalia Gherardi y Corina Rodríguez Enríquez quienes defienden la deducción de la regulación española. Al respecto manifiestan: “Es una medida positivamente novedosa, afirmación que se puede justificar en varias razones; primero, su objetivo es compensar tanto los costes laborales derivados de la maternidad, como los de oportunidad; segundo, busca tanto el apoyo de la familia como la compatibilización de la vida laboral y familiar de la mujer; tercero, por la importancia de la cuantía, puede suponer hasta mil doscientos euros anuales por hijo; cuarto, pretende estimular la maternidad; quinto, es la primera deducción española con carácter reembolsable ya que se puede solicitar por adelantado[[36]](#footnote-36)”.

Sin embargo, se encuentran posturas contrarias a lo antedicho, entre ellas la de Maria Pazos Moran. Para ella “la reducción de impuestos a las mujeres trabajadoras con una doble finalidad: incentivar el empleo femenino y compensar a las mujeres por su menor renta. Ambos objetivos son loables, pero ninguno de ellos se verá favorecido por este camino. En cuanto a las diferencias salariales, a primera vista parece evidente que un ingreso adicional para todos los componentes del grupo que tiene menores ingresos disminuirá la diferencia de medias entre ambos grupos. Sin embargo, tendríamos que considerar que parte de esta rebaja de impuestos a las mujeres se trasladará a los beneficios empresariales. Si ahora una mujer casada (que es la que puede plantearse la opción de quedarse en casa) está dispuesta a trabajar por un determinado salario, con la rebaja estará dispuesta a trabajar por menos. Esto permitirá a los empresarios ofrecer menores salarios a las mujeres (no solamente de las mujeres casadas), introduciendo un peligroso factor de permanencia de la desigualdad salarial”. Continúa analizando: “No se trata, pues, de ofrecer un trato de favor o ventajista a las mujeres sino de eliminar los sesgos de género, así llamados porque consisten en ofrecer un trato preferente a los hombres mientras se descuidan las situaciones que afectan a las mujeres. Con la neutralidad nos basta, la cuestión es distinguir entre las políticas verdaderamente neutrales frente al género y la apariencia de neutralidad (políticas llamadas en la literatura feminista ‘genderblind’ o ‘ciegas frente al género’)[[37]](#footnote-37)”.

Pazos remarca que el empresario, a la hora de contratar a una mujer o a un hombre, no sabe si esas personas van a tener hijos o dependientes que cuidar. Lo que sí saben es que las mujeres tienen una probabilidad mucho más alta de ausentarse por razones de cuidado, lo que puede originarle costes extra-laborales importantes. Este fenómeno, que se conoce como ‘discriminación estadística’, afecta a todas las mujeres. En este punto se cuestiona “¿No sería más lógico empezar por eliminar estos desincentivos diferenciales? Si se quieren igualar las tasas de empleo de ambos sexos, lo más urgente es igualar e individualizar totalmente el sistema de impuestos y prestaciones. Para ello tampoco se necesitan programas especiales dirigidos a mujeres”. Por lo que concluye: “Estas supuestas ‘ventajas’ para las mujeres, como la rebaja de impuestos propuesta, nunca son tan generosas como para llegar a equilibrar las verdaderas diferencias (en este caso, aproximadamente el 30% de diferencia de ingresos medios). Tampoco atienden las necesidades de las personas realmente necesitadas. Mucho menos eliminan los factores que empujan a las mujeres a la dependencia económica. Sin embargo, contribuyen a la permanencia de la desigualdad: en lugar de atajar las causas, contribuyen a la falsa impresión de que se da preferencia a las mujeres. No se necesitan ‘políticas para las mujeres por ser mujeres’ ni compensaciones en lugar del salario y la posición que se han ganado por su formación y su trabajo, sino aplicar los principios de la actuación de los poderes públicos y de la política social a toda la ciudadanía”.

Como se observa, resulta de tema que abre un debate sumamente interesante. Resulta claro que se requiere de un cambio cultural para eliminar prácticas viciadas de estereotipos relacionados con el hombre proveedor y la mujer ama de casa, pero mientras eso no suceda, ¿no resulta conveniente establecer medidas positivas para las mujeres en políticas activas de empleo? Se deja planteado el interrogante.

**Impuestos al consumo**

Como se ha mencionado previamente, la alta carga en impuestos indirectos afecta la equidad social. Los impuestos indirectos pesan más en las poblaciones de menos recursos. No solo por la redistribución por niveles de ingresos sino también en términos de desigualdades de género. Y cuando hay sesgos esa capacidad redistributiva entre sexos disminuye.

Existen numerosas propuestas para que exista un tratamiento diferencial en IVA de los productos de gestión menstrual, sobre lo que se denomina “impuesto rosa”. En Argentina, como en muchos países, estos productos están gravados con IVA.

En el ya mencionado informe “Impuestos sexistas para América Latina” sentencia al respecto: “Los impuestos a las toallas sanitarias, bienes de primera de necesidad para las mujeres, implican ponerle un costo a un hecho biológico que solo les ocurre a estas, como es la menstruación. Esto produce y reproduce brechas sociales a partir de diferencias biológicas, un hecho absolutamente inaceptable, máxime si proviene de una política estatal” Los resultados de su investigación concluyen en que “en nueve de los diez países evaluados, las toallas higiénicas y los tampones tienen la tarifa plena del IVA. El costo promedio anual del impuesto ronda los setenta millones de dólares. Gravar los productos de atención a la menstruación significa que el hecho generador del impuesto es ¡la condición biológica de menstruar. Justificar un impuesto a partir de una diferencia biológica no es solo un acto de violencia económica, sino que se traduce en un costo adicional por ser mujer. Este IVA, además de tener de por sí un carácter regresivo, es un impuesto sexista que profundiza la desigualdad económica de las mujeres en la región más desigual del planeta y ahonda las brechas de género existentes en el sistema económico[[38]](#footnote-38)”

Corina Rodríguez Enríquez, economista y referente del movimiento feminista, en el Conversatorio regional sobre tributación y género exponía: “la tributación es un elemento clave para la justicia distributiva. Los productos de gestión menstrual que consumimos los cuerpos con posibilidad de gestar, y si bien es un consumo individual que hacemos las personas que menstruamos, está asociado a una función reproductiva, ahí cobra relevancia el planteo de esta cuestión como parte de un problema social. Mirar la tributación sobre los productos de gestión menstrual nos permite fortalecer este nexo entre dimensión económica y dimensión reproductiva. Es importante también porque la dificultad para acceder a estos productos (muchas veces determinada por su costo) tiene consecuencias que profundizan la desigualdad, en la salud[[39]](#footnote-39)”.

Por su parte, Paulina Castaño, miembro de FUNDAR[[40]](#footnote-40) opinaba: “Desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género este tratamiento resulta discriminatorio y atenta contra diversos derechos de las mujeres. La menstruación es un proceso biológico que obliga a las personas menstruantes a realizar un gasto en productos para poder gestionarla de la mejor manera. La capacidad de acceder a estos productos así como espacios para gestionarla de una forma segura afecta la libertad de una persona para estudiar, trabajar, mantenerse saludable, etc. Al facilitarle el acceso a estos productos mejoraría la calidad de vida de las mujeres generando condiciones para su desempeño igualitario en la sociedad”. Castaño finaliza sentenciando “Su tratamiento fiscal debería equipararse a otro tipo de bienes de primera necesidad[[41]](#footnote-41).”

A su vez, existen numerosas publicaciones de la organización Economía Feminista que reflejan las inequidades que acarrean la gravabilidad de estos productos. En la publicación “stop theTamponTax: un impuesto que discrimina” se revelan datos estadísticos sobre el tema en cuestión: “Casi siete de cada diez personas del sector de menores ingresos de la Argentina son mujeres y promedian un ingreso de $ 2566 pesos por mes (valor a marzo 2017). Para ellas, el costo estimado para gestionar la menstruación mediante el uso de toallitas o tampones representa casi un 10% de sus ingresos. Este gasto no es optativo para las personas que menstrúan y, sin embargo, ganan un 27% menos que los varones. La carga económica que genera la menstruación resulta central para considerarla un factor de desigualdad[[42]](#footnote-42)”. Entre otros factores ya mencionados, sus publicaciones remarcan: “En un contexto en el que la mayor parte de las personas pobres son mujeres, no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. “Además, debido a la falta de acceso a información y recursos, muchas veces se practican formas de gestión menstrual antihigiénicas como el uso de paños viejos y desgastados, o trapos, que pueden causar infecciones del tracto urinario, problemas de salud reproductiva y hasta infertilidad[[43]](#footnote-43)”.La creación de políticas públicas que ataquen directamente las desigualdades producidas por la restricción de acceso a productos adecuados para contener el sangrado es un eje fundamental en el camino a instalar nociones inclusivas en la sociedad. Para ello, la menstruación debe dejar de ser cosa de mujeres y convertirse en un tema de Estado a la hora de pensar cómo garantizar igualdad de oportunidades para todos.

Ante este sesgo implícito se proponen distintas alternativas, como ser la exención de estos productos en IVA o el reintegro de este. La exención debiera admitir la posibilidad de computar créditos fiscales contra otras operaciones gravadas o el reintegro de los mismos. Además, hay que tener en cuenta de que no siempre que se reduce el IVA en los productos no llega el beneficio al destinatario, no repercute en una baja de precio por situaciones de mercado. Actualmente, la tecnología permite utilizar otros sistemas como el reintegro del IVA abonado. La desventaja de este sistema es la economía no formalizada, ya que la persona debe contar mínimamente con una cuenta bancaria o tarjeta para que el Estado le pueda reintegrar el mismo. Además, resulta fundamental que el procedimiento utilizado sea sencillo y eficaz.

El objetivo por lograr con ambas alternativas es la recomposición indirecta del ingreso disponible de la mujer.

Asimismo, resulta conveniente lograr la eliminación del impuesto a los ingresos brutos en todas las etapas económicas de estos productos. Hay quienes proponen, además, incluir otros tipos de productos en este grupo, como ser productos de primera infancia (pañales, leches maternizadas, etc.) y preservativos femeninos.

**Otros**

La Dra. Verónica Grondona aborda la temática relacionada con fiscalidad internacional incorporando la perspectiva de género: “la evasión y elusión fiscal internacional como una cuestión que debe ser atendida cuando analizamos las políticas de género. Tratar de abordar cuales son las estructuras que se utilizan a los fines de ocultar a los verdaderos beneficiarios finales que se ocultan detrás de determinadas cáscaras[[44]](#footnote-44)”.

En otro marco de ideas, se evidencia la importancia de juzgar con perspectiva de género. Entre los deberes que debe cumplir el Estado, a través del Poder Judicial o los organismos jurisdiccionales como el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra el de realizar el control de convencionalidad conforme el art. 7 de la Convención de Belem do Pará y Recomendación 30 de la CEDAW, en los términos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Almonacid Arellano” del 26/9/06. En el citado precedente se señaló que, si un Estado es parte de la convención, todos sus órganos, incluidos los jueces, se encuentran obligados a velar porque las disposiciones de la convención no se vean mermadas por normas contrarias – incluso realizando el control de convencionalidad de oficio[[45]](#footnote-45).

La Dra. Alexia Sofía Alonso asevera al respecto: “En la construcción de una narrativa jurídica en clave de género nos encontramos ante una serie de expectativas socialmente construidas en torno a la mujer, que se aplican a todas las femeneidades con prescindencia de las características específicas de cada persona. Dichas concepciones marginan a las mujeres de los espacios de poder y cercenan sus libertades, limitándolas a cumplir roles determinados, ligados a la maternidad y al ámbito domestico. Los estereotipos de género tienen el efecto de marcar un orden de cosas, una normalidad, y es en este sentido que funcionan como mecanismos de disciplinamiento social que reproducen una cultura discriminadora contra las mujeres. Estos tienen un fuerte arraigo en el imaginario de los operadores judiciales, así como en la doctrina y la jurisprudencia que usan en su labor cotidiana[[46]](#footnote-46)”.

Por último, pero no menos importarte, en este camino resulta imprescindible que la Administración Nacional de Ingresos Públicos (como cualquier otro organismo público) incorpore una visión con perspectiva de género: desagregando la información por sexo de modo que permita realizar diferentes análisis desde recaudación tributaria y desde las mismas tareas de verificación y fiscalización.

Al respecto corresponde resaltar que en Argentina está vigente la denominada “Ley Micaela”[[47]](#footnote-47), la cual establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, víctima de femicidio.

**6 CONCLUSIONES**

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad la brecha salarial promedio en Argentina entre hombres y mujeres es de un 35,6%[[48]](#footnote-48). Eso significa que, por cada $ 100 pesos argentinos que un hombre gana en este país, una mujer solo gana $ 64,4 pesos. Las mujeres están sobre representadas dentro de la población pobre, por eso los impuestos indirectos que grava el consumo las afectan de manera más significativa.

Ante esta realidad urgen medidas de acción positiva, medidas que permitan discriminar para igualar. Como refería la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "medidas de acción positiva" traducidas tanto en "discriminaciones inversas" cuanto en la asignación de "cuotas benignas" en beneficio de ellas[[49]](#footnote-49).

Los poderes públicos tienen obligación constitucional y convencional de aportar medidas políticas a favor de la igualdad y para que los grupos vulnerables gocen de los derechos fundamentales que no pueden satisfacer por sus propios medios.

En ese contexto resulta fundamental la perspectiva de género sobre la tributación. Las políticas fiscales no son neutras, tampoco tienen fines exclusivamente fiscales. Un sistema tributario equitativo no debe mantener la actual “neutralidad” existente ya que existen sesgos implícitos que socavan aún más las diferencias de género.

La política tributaria debe convertirse en una herramienta realmente eficaz y necesaria para poner en marcha la igualdad y la capacidad contributiva. Constituye en un elemento necesario para conseguir un modelo económico y social sostenible que colabore a reducir las brechas existentes. Dicha política fiscal con perspectiva de género debe pensarse como algo dinámico: el sistema tributario debe considerar la dinámica de los núcleos familiares en su economía y valorizar el aporte de la economía productiva no remunerada (integrada principalmente por mujeres) para la producción de bienes, servicios y para la sostenibilidad de la vida.

A lo largo de este trabajo se han mencionado algunas propuestas destinadas a reducir los sesgos existentes tanto en la ley de impuesto a las ganancias como en IVA. Las medidas sugeridas en ganancias están orientadas a adaptar deducciones y exenciones impositivas a los nuevos modelos familiares: mujeres con una doble presencia que trabajan por un sueldo remunerado sin dejar de lado las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, la existencia un número cada vez mayor de familias monomarentales o familias conformada por personas convivientes sin estar legalmente casadas, entre otras.

En cuanto a los impuestos al consumo, resulta sumamente necesario aliviar la carga tributaria de las mujeres que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, como una forma de recomponer indirectamente sus ingresos. Esa afectación se puede corregir con instrumentos como: tarifas diferenciales, exenciones, exclusiones, reintegros, etc.

Asimismo, me gustaría remarcar la importancia de la existencia del diálogo entre distintos actores de la sociedad en temas relacionados con la lucha feminista que se traduce en un creciente enfoque interdisciplinario, en donde esta vez le tocó turno al análisis de la política fiscal. Este diálogo está contribuyendo a la construcción de una base de conocimiento que es instrumental para articular consensos. Ante esta situación, resulta fundamental generar investigación y datos estadísticos sobre el tema. En ese sentido, un presupuesto con perspectiva de género resulta uno de los pilares fundamentales para progresar en ese camino.

Por último, me gustaría recalcar además que la política tributaria amigable al género no se limita solo al análisis de los sesgos en la tributación sino que debe abarcar también un enfoque integral tanto desde la óptica de la Administración Federal de Ingresos Públicos, como de otros organismos administrativos, entre ellos el Tribunal Fiscal de la Nación y de toda instancia judicial que intervenga en una discusión del tipo tributario. Se evidencia la importancia de juzgar con perspectiva de género.

Celebro que esta problemática se haya convertido en un tema de agenda, que se encuentre instalado como tema de interés para la sociedad toda y que sea parte de un simposio tributario de tan grande investidura, ya que las luchas importantes de la historia son colectivas.

**7 BIBLIOGRAFIA:**

1. ACIJ – Asociación civil por la igualdad y la justicia. Conversatorio regional sobre tributación y género. 11 de Septiembre de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=iKXDkpcdQyk>
2. BCRA – Banco Central de la República Argentina. Campaña: “#MujeresyBrechaEconómica”. 02 de Marzo de 2020. Recuperado de

<http://www.bcra.gov.ar/Noticias/8M-Mujeresybrechaeconomica.asp>

1. Campanario Sebastián. El “impuesto rosa” o lo último en la economía de género. Revista Economía Feminista. 06 de Marzo de 2016. Recuperado de

https://economiafeminita.com/hola-mundo/

1. CLACSO – Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Marchas y contramarchas en las políticas locales de género. Dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina. 2019. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200227055551/Marchas-y-Contramarchas.pdf>
2. Center for economic and social rights. Política fiscal para la igualdad y los derechos. Mapeo de debates, iniciativas y actores de la región andina. 2017. Recuperado de <https://www.cesr.org/sites/default/files/Politica_Fiscal_Igualdad_Derechos.pdf>
3. CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas”. Diciembre 2006. Recuperado de <http://www.estimacionestributarias.com/archivos/pol%20tributaria.%20tributac%20en%20AL.%20GS%20OS.pdf>
4. CIAT – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Jornada virtual: “Tributación y Equidad de Género”. 28 de Agosto de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=jqXefQIJsuA>
5. Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA. “Fundamentos para la construcción de una Reforma Tributaria con perspectiva de género. 27 de Agosto de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=E-UqfCI0nIE>

1. Coronello Silvina. “Hacia una tributación con perspectiva de género. Diario ámbito. 12 de Noviembre de 2019. Recuperado de

<https://www.ambito.com/novedades-fiscales/novedades-fiscales/hacia-una-tributacion-perspectiva-genero-n5065082>

1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad " del 26 de Marzo de 2019. Recuperado de <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7511573&cache=1565361026977>
2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. "González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento. 21 de Noviembre de 2018. Recuperado de <https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Gonzalez%20Victorica%20(20217).pdf>
3. Díaz Calvarro Julia María. La valoración del sistema fiscal desde el feminismo y la perspectiva de género. Universidad de Extremadura.
4. Dirección de Economía, Igualdad y Género. “Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos”. 16 de Marzo de 2020. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf>
5. FES – Fiedrich Ebert Stiftung. Balbuena Aris, Moreno Natalia y Rubilar Catalina. Impuestos sexistas en América Latina. Marzo de 2020. Recuperado de <http://www.fes.org.ar/public/IMPUESTOS%20SEXISTAS.pdf>
6. FINDEL – Fundación internacional para el desarrollo local. Conferencia virtual “Presupuesto municipal con perspectiva de género”. 05 de Mayo de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=agx0K5wHedE>
7. Foro Económico Mundial. Cuidado con la brecha de 100 años. Publicado 16 de diciembre de 2019. Recuperado de <https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality>
8. GDR – Género y Derecho Actual. Revista Nº 1 Junio 2020. Recuperado de <https://gda.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/revista-junio-gda.pdf>
9. GDR – Género y Derecho Actual. Revista Nº 2 Septiembre 2020. Recuperado de <https://gda.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/revista-septiembre-gda.pdf>
10. Gherardi Natalia y Rodríguez Enríquez Corina. Los impuestos como herramienta para la equidad de género: el caso del impuesto a las ganancias sobre personas físicas en Argentina. Centro Interdisciplinario de Estudio de Políticas Públicas. Diciembre 2008. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/ContributionsFiscaltaxpolicy/ELA_CIEPP2.pdf>
11. Guitart Violeta. ‘Stop the Tampon Tax’: un impuesto que discrimina” Revista Economía Feminista. 25 de Marzo de 2017. Recuperado de

<https://economiafeminita.com/stop-the-tampon-tax-un-impuesto-que-discrimina-2/>

1. ICAP - Instituto de Capacitación Parlamentaria. “Presupuesto Público con Perspectiva de Género - Nos visita de Mercedes D'Alessandro” 29 de Septiembre de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=sMRi6oBc6qc>
2. Impuestos y Género en Argentina. Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/ContributionsFiscaltaxpolicy/ELA_CIEPP3.pdf>
3. Instituto de Estudios Fiscales (España). Sesgos de género en los sistemas tributarios. Abril 2005. Recuperado de <https://www.ief.es/docs/investigacion/genero/FG_Stotsky.pdf>
4. O’Donnell Agustina y Gamberg Guillermina. Impuestos para la igualdad de género. Diario Tributario, Aduanero y Financiero. 18 de Septiembre de 2019. Recuperado de <https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2019/09/Copia-de-Doctrina-Base-modelo-TRIBUTARIO-1.pdf>
5. Oxfam. “Ajustar la lente. Fiscalidad desde un enfoque de género: metodología de análisis. Septiembre de 2014. Recuperado de <https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/dp-adjusting-the-lens-lac-fiscal-policy-gender-260914-es.pdf>
6. Pazos María. Rebaja de impuestos a las mujeres: ¿la acción positiva como arma arrojadiza? Mujeres en Red. Febrero de 2008. Recuperado de

<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1375>

1. Revista Economía Feminista. Sangre, sudor y gastos: ¿por qué la menstruación es un factor de desigualdad? 23 de Agosto 2019. Recuperado de <https://economiafeminita.com/sangre-sudor-y-gastos-por-que-la-menstruacion-es-un-factor-de-desigualdad/>
2. Revista Economía Feminista. La desigualdad de género se puede medir. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 1er trimestre de 2020. Recuperado de <https://economiafeminita.com/informe-desigualdad-genero/>
3. Sánchez Huete Miguel Ángel. La tributación y su impacto de género en España. Agosto 2013. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532013000200008>
4. Stotsky Anet. How tax systems treat men and women differently. Marzo 1997. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/03/pdf/stotsky.pdf>
5. Universidad Nacional de Moreno. Jornada virtual “Tributación y género”. 16 de Julio de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eh_W5yQMcyE>
6. Universidad de Buenos Aires (UBA) Jornada virtual: “Reforma tributaria y presupuestos públicos con perspectiva de género”. Zulema Mosri. 26 de Agosto de 2020 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=OkIEMyo2wlA>
7. Universidad de Buenos Aires (UBA) Jornada virtual: “Reforma tributaria y presupuestos públicos con perspectiva de género” Fabiana Schafrik. 26 de Agosto de 2020 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dCA4H9PIQZU> |.
8. Universidad del Cema. Jornada virtual “Pensando una Reforma Tributaria con Perspectiva de Género | Escuela de Negocios”. 30 de Julio de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=LMaHVpNw3RA>
9. Universidad del Este. Jornada virtual “Género y Tributación”. 27 de Agosto de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=o88DEcithZI>
10. WEF Argentina – Women Economic Forum. Ciclo de Charlas Virtuales: “Mujeres, Actividad Productiva y Reforma Tributaria”. 23 de Septiembre de 2020. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=bGWuBBGgAvw>

1. Cuidado con la brecha de 100 años. Foro Económico Mundial. 16 de diciembre de 2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. María Pazos Morán. Políticas fiscales y equidad de género. Instituto de Estudios Fiscales. Fundación Carolina. 2005 [↑](#footnote-ref-2)
3. Impuestos sexistas en América Latina. Aris Balbuena, Natalia Moreno y Catalina Rubilar. Marzo de 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. “Las brechas de género en la Argentina.Estado de situación y desafíos”. Dirección de Economía, Igualdad y Género. 16 de Marzo de 2020 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mujeres y Brecha Económica. Campaña del BCRA para el 8M. 2 de Marzo de 2020 [↑](#footnote-ref-5)
6. Gherardi Natalia y Rodríguez Enríquez Corina. Los impuestos como herramienta para la equidad de género: el caso del impuesto a las ganancias sobre personas físicas en Argentina. Centro Interdisciplinario de Estudio de Políticas Públicas. Diciembre 2008. [↑](#footnote-ref-6)
7. La valoración del sistema fiscal desde el feminismo y la perspectiva de género. Julia María Díaz Calvarro. Universidad de Extremadura. [↑](#footnote-ref-7)
8. Agustina O´Donell. Disertación en la Jornada virtual “Género y tributación” Universidad del Este. 27 de Agosto de 2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Decreto 07/2019. Boletín Oficial de la República Argentina. 24 de Diciembre de 2019 [↑](#footnote-ref-9)
10. Idem (5) [↑](#footnote-ref-10)
11. “La desigualdad como límite al ejercicio del derecho de propiedad para el género femenino” publicado en la primer revista “Genero y Derecho Actual”. Junio 2020 [↑](#footnote-ref-11)
12. "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad " del 26 de Marzo de 2019 [↑](#footnote-ref-12)
13. Francisco Ferrer. Disertación en la Jornada virtual “Género y tributación” Universidad del Este. 27 de Agosto de 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Agustina O´Donell. Disertación en la Jornada virtual “Tributación y Género” Universidad de Moreno. 16 de Julio de 2020 [↑](#footnote-ref-14)
15. "González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento. 21 de Noviembre de 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Oxfam es una confederación internacional de 19 organizaciones que trabajan juntas en 90 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza. [↑](#footnote-ref-16)
17. “Ajustar la lente. Fiscalidad desde un enfoque de género: metodología de análisis. Oxfam. Septiembre de 2014 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sesgos de género en los sistemas tributarios. Instituto de Estudios Fiscales - España. Abril 2005 [↑](#footnote-ref-18)
19. Idem (18) [↑](#footnote-ref-19)
20. La desigualdad como límite al ejercicio del derecho de propiedad para el género femenino. GDR – Género y Derecho Actual. Revista Nº 1 Junio 2020 [↑](#footnote-ref-20)
21. Natalia Moreno Salamanca. Disertación en el Conversatorio regional sobre tributación y género. ACIJ – Asociación civil por la igualdad y la justicia.11 de Septiembre de 2020 [↑](#footnote-ref-21)
22. O’Donnell Agustina y Gamberg Guillermina. Impuestos para la igualdad de género. Diario Tributario, Aduanero y Financiero. 18 de Septiembre de 2019 [↑](#footnote-ref-22)
23. Idem (7) [↑](#footnote-ref-23)
24. Ley 35/2006. Publicada en el Boletín Oficial del Estado de España el 28 de Noviembre de 2006. [↑](#footnote-ref-24)
25. Idem (7) [↑](#footnote-ref-25)
26. Idem (7) [↑](#footnote-ref-26)
27. Idem (7) [↑](#footnote-ref-27)
28. Idem (7) [↑](#footnote-ref-28)
29. Idem (7) [↑](#footnote-ref-29)
30. Sangre, sudor y gastos: ¿por qué la menstruación es un factor de desigualdad? Revista Economía Feminista. 23 de Agosto 2019 [↑](#footnote-ref-30)
31. Datos extraídos de la disertación “Fundamentos para la construcción de una Reforma Tributaria con perspectiva de género. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. 27 de Agosto de 2020. [↑](#footnote-ref-31)
32. Idem (31) [↑](#footnote-ref-32)
33. Idem (6) [↑](#footnote-ref-33)
34. Impuestos y Género en Argentina. Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. [↑](#footnote-ref-34)
35. Idem (31) [↑](#footnote-ref-35)
36. Idem (6) [↑](#footnote-ref-36)
37. Pazos María. Rebaja de impuestos a las mujeres: ¿la acción positiva como arma arrojadiza? Mujeres en Red. Febrero de 2008 [↑](#footnote-ref-37)
38. Idem (3) [↑](#footnote-ref-38)
39. Corina Rodríguez Enríquez. Disertación en el Conversatorio regional sobre tributación y género. ACIJ – Asociación civil por la igualdad y la justicia.11 de Septiembre de 2020 [↑](#footnote-ref-39)
40. Fundar es una organización de la sociedad civil plural e independiente —con sede en México— que se rige por los principios de horizontalidad y transparencia [↑](#footnote-ref-40)
41. Paulina Castaño. Disertación en el Conversatorio regional sobre tributación y género. ACIJ – Asociación civil por la igualdad y la justicia.11 de Septiembre de 2020 [↑](#footnote-ref-41)
42. Guitart Violeta. ‘Stop theTamponTax’: un impuesto que discrimina” Revista Economía Feminista. 25 de Marzo de 2017. [↑](#footnote-ref-42)
43. Revista Economía Feminista. Sangre, sudor y gastos: ¿por qué la menstruación es un factor de desigualdad? 23 de Agosto 2019. [↑](#footnote-ref-43)
44. Verónica Grondona. Disertación en Universidad Nacional de Moreno. Jornada virtual “Tributación y género”. 16 de Julio de 2020. [↑](#footnote-ref-44)
45. Idem (20) [↑](#footnote-ref-45)
46. Estereotipos de género: la perspectiva feminista en el discurso jurídico. GDR – Género y Derecho Actual. Revista Nº 2 Septiembre 2020 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ley 26.485. Publicada en Boletín Oficial el 14 de Abril de 2019 [↑](#footnote-ref-47)
48. Idem (4) [↑](#footnote-ref-48)
49. Idem (12) [↑](#footnote-ref-49)